JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **110013103025 2018 00451 00.**

Obedézcase y cúmplase lo resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en providencias de 8 de septiembre de 2023, mediante la cual decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del auto de 15 de julio de 2022.

Atendiendo a lo ordenado por el Superior funcional, este despacho adopta las siguientes medidas:

1. En los términos de los numerales 6 y 7 del artículo 375 del CGP, en concordancia con el artículo 293 del mismo ordenamiento, se ordena el emplazamiento de todas las personas que se crean con derechos a intervenir sobre el inmueble objeto de la excepción de prescripción adquisitiva de dominio. Instálese la valla de que trata el numeral 7 del artículo 375 del CGP, en el predio objeto de la excepción de prescripción adquisitiva de dominio. Por la parte interesada (excepcionante) proceda de conformidad.

2. En razón a la excepción de prescripción propuesta por la demandada MARIA CONCEPCION BERNAL GOMEZ, se ordena al citado extremo del proceso, que en el término de cinco (5), siguientes a la notificación por estrado de este proveído, allegue al juzgado los siguientes documentos:

- a) Certificado especial que expide el Registrador de Instrumentos Públicos, en el que conste las personas que figuran como titulares de derechos reales principales sujetos a registro respecto del bien objeto de prescripción adquisitiva. Lo anterior, de conformidad con el numeral 5° del artículo 375 del C. G del P.
- b) Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 50S-026179.

2. Así mismo por secretaria OFICESE, a la Superintendencia De Notariado Y Registro, Instituto Colombiano Para El Desarrollo Rural (Incoder), Unidad Administrativa Especial De Atención Y Reparación Integral A Víctimas Y Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), informándoles de las existencia de este proceso para que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones y competencias, sobre la solicitud de prescripción adquisitiva del inmueble objeto de esta demanda. (numeral 6° del artículo 375 ibídem).

3. ORDENAR la inscripción de la presente, en cuanto tiene que ver con la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del inmueble descrito en la demanda, identificado con la matricula inmobiliaria No 050 S - 26179. Oficiése de conformidad.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría
Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023.
ANDREA LORENA PAEZ ARDILA Secretaria

ysl

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fe50df27c8a5c2db0c827b69127ba0758e29cdcee8c25928a763383e31e5c0f0**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **11001 31 03 025 2023 00284 00.**

Resuelve el juzgado el recurso de reposición propuesto por la apoderada judicial de JUANCAMAR Y CIA S EN C, contra la decisión adoptada en auto del 15 de junio de 2023, por el cual se libró mandamiento ejecutivo en este asunto.

1. La censura fue fundamentada, en síntesis, en que el pagaré aportado como base de recaudo no cumple con los requisitos de claridad y exigibilidad de la obligación, pues el valor allí contenido no corresponde al adeudado por la demandada como consecuencia del negocio causal, ya que se indicó la suma de \$2.560.545.800,00, cuando en las facturas pendientes de pago a favor de la demandante, arrojan un valor total de \$2.033.785.237; por lo que la obligación reclamada no es expresa ni clara, y no corresponde a la realidad.

Además, en el título valor y la carta de instrucciones, aparece como deudora la sociedad JUANCAMAR Y CIA S EN C, representada legalmente por MARÍA CLARA SÁNCHEZ OCAMPO; sin embargo, en sentencia de fecha 21 de junio de 2019 proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, confirmada en decisión de segunda instancia del 24 de septiembre de ese año, se declaró la nulidad absoluta de todos los nombramientos de representantes legales del 9 de marzo de 2017 realizado en la sociedad, dentro de los cuales estaba el de la representante la señora Sánchez Ocampo. Esa situación fue comunicada a la demandante, quien nunca actualizó el título valor en blanco ni la carta de instrucciones, por lo que considera que estos no están suscritos por la sociedad convocada, por tanto, no lo son exigibles.

Adicionalmente, sostiene que se configura la excepción previa de ineptitud de demanda por falta de requisitos formales contemplada en el numeral 5 artículo 100 del CGP, puesto que, en su sentir, el título valor ejecutado no cumple con los requisitos formales antes advertidos.

2. La parte actora se pronunció dentro del término de traslado, argumentando, en resumen, que los argumentos expuestos por la demandada no atacan los requisitos formales del título valor, por lo que no habría lugar a la reposición solicitada. Y, aunque la demandada basa su argumento en una supuesta diferencia entre el valor reclamado y el adeudado, aduciendo algunos pagos

efectuados, no hace una relación de facturación adecuada que le permita a la ejecutante verificar si, en efecto, se hizo pago adicional que deba ser objeto de ajuste; situación que, de constatarse, no afecta la exigibilidad del título valor.

Además, en ningún momento se niega que la sociedad demandada haya suscrito el pagaré, a través de quien en ese momento ejercía como representante legal, sino que pretende que, con ocasión a presuntas nulidades declaradas, se genere un efecto desfavorable a un tercero de buena fe como lo sería la demandante, quien recibió el pagare de quien fungía como representante legal de la compañía convocada.

3.. Frente a los anteriores puntos cabe memorar, que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 422 y 430 del C. G. del P., para efectos de librar mandamiento de pago, el juez debe solamente verificar que la demanda cumpla los requerimientos establecidos en la norma adjetiva y que el título aportado como objeto de recaudo contenga los requisitos formales para que preste mérito ejecutivo, como lo son la obligación clara, expresa y exigible, que provengan del deudor o de su causante y que constituya plena prueba en su contra.

La obligación es expresa cuando se encuentra debidamente determinada y especificada; la claridad hace alusión a que los elementos de la obligación aparezcan irrefutablemente señalados; y la exigibilidad significa que son solamente ejecutables las obligaciones puras y simples, o que, habiendo estado sujetas a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquél o cumplido aquélla.

Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia, los títulos ejecutivos deben cumplir como requisitos formales, que "*(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante (. . .)* y como requisitos sustanciales: que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible (...)¹.

Debe precisarse que la esencia del proceso ejecutivo lo constituye el título que reúna las condiciones previstas en los art. 422 y 430 del Estatuto Procesal, y por ende, produzca en el juez, de su simple lectura, el grado de certeza necesario para encontrar en él la existencia de una obligación indiscutible, sin que tenga que acudir a otros razonamientos para ello, o como mejor lo explica el Tribunal Superior de Bogotá² :

¹ Sentencia T 747 de 2013 y SU 041 de 2018, Corte Constitucional.

² Sentencia del 28 de abril de 1999, Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete. (Texto transcrito de "Teoría y Práctica de los Procesos Ejecutivos", Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2007, Armando Jaramillo Castañeda, página 194).

“La obligación a cargo del demandado, a más de constituir plena prueba contra el deudor, por no haber duda sobre la autenticidad del documento, debe ser exigible y expresar con claridad en qué consiste. Según lo han expuesto la jurisprudencia y la doctrina, para que la ejecución se ajuste a los presupuestos requeridos por la norma en mención, deben estar completamente expresados en el título los términos esenciales del mismo, tales como el contenido y las partes vinculadas a él, de suerte que, per se, resulte inequívoca e inteligible.

De ahí que, en torno a los conceptos de claridad, expresividad y exigibilidad de la obligación, se tenga por averiguado que ésta carece de tales exigencias cuando es equívoca, ambigua o confusa por no tener la suficiente inteligibilidad para distinguir en forma palmaria el alcance o contenido del objeto o de la prestación, o cuando sólo ostenta expresiones implícitas o presuntas. Por ende, sin desconocer que en algunas hipótesis debe acudir el juzgador a razonamientos lógicos en orden a observar si definitivamente, por ser la única estimación acertada, hay título ejecutivo, ello tampoco lo autoriza en caso de duda para hacer deducciones e inferencias personales que sean el resultado de sopesar diferentes posibilidades, pues al actuar así su labor habrá consistido en escoger la más probable, como que de proceder en la forma últimamente señalada estaría quebrantando la naturaleza y fines del proceso de ejecución indicado en el inicio de estas consideraciones. En este sentido, [ha] expresado la doctrina que falta el requisito de expresividad “cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos considerándola como una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta (Hernando Devis E. Compendio de derecho procesal, tomo III, pág. 479, 3ª. Edición)...”

Tratándose de títulos valores, estos deben cumplir con los requisitos comunes establecidos en el artículo 621 del Código de Comercio, que son: 1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y 2) La firma de quién lo crea. Por su parte, el pagaré, debe cumplir además con los presupuestos del artículo 709 ib., es decir: “1) *La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero;* 2) *El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago;* 3) *La indicación de ser pagadero a la orden o al portador,* y 4) *La forma de vencimiento.”*

Descendiendo al caso en estudio, se observa que el Juzgado libró mandamiento de pago por las sumas solicitadas por la parte actora, teniendo en cuenta el pagaré No. 0097J, allegado con la demanda, en el cual se indicó el valor, la promesa de pagar dicha suma, el nombre a quien debe hacerse el pago, la forma de pago, la fecha de vencimiento (26 de mayo de 2023), y la firma de MARÍA CLARA SÁNCHEZ OCAMPO como representante legal de JUANCAMAR Y CIA S EN C, en su condición de deudor principal, y como deudores solidarios CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ OCAMPO y la señora SÁNCHEZ OCAMPO; por lo que se cumplió lo dispuesto en los preceptos normativos antes transcritos.

En ese orden, para este juzgado, tanto los requisitos previstos para la constitución de un título ejecutivo, como los particulares que debe contener el título valor, se encuentran acreditados, pues de la simple lectura del instrumento aportado como base de ejecución, se puede establecer la obligación debidamente determinada, los elementos que aparecen irrefutablemente señalados y su exigibilidad en una fecha cierta y determinada, sin que para ello dependa de documentos adicionales, por cuanto el artículo 619 del Código de Comercio, definió como títulos valores: “*son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que*

en ellos se incorpora".

De acuerdo a esa definición, el título valor es un documento en el que se incorpora el valor pactado entre las partes, cuando se expide se vuelve único y autónomo, esto quiere decir, *"que no se requiere de otra prueba para demostrar el valor incorporado en el momento de la emisión"*³; por lo tanto, el argumento de no ser la suma reclamada aquella debida por la demanda, por haber efectuado presuntos pagos o abonos a la obligación, en nada resta claridad o exigibilidad a la misma, pues basta con la lectura del instrumento caratular para tener certeza del valor reclamado. Cosa distinta es que la demandada haya efectuado pagos o abonos a la deuda, los cuales deberán discutirse mediante los mecanismos exceptivos pertinentes, sin que ese debate ataque comporte insuficiencia de requisitos formales del título.

En lo que respecta a la suscripción del documento cartular, el artículo 625 del Estatuto Mercantil, señala que *"Toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación"*. De allí, que la firma sea uno de los requisitos del título valor y con ella se manifiesten la voluntad de obligarse. A su turno, el artículo 640 ibídem permite que los títulos valores sean firmados por representantes, sin embargo, siempre tiene que estipularse en el título valor la calidad en que se firma, pues de no ser así se entiende que firma en nombre propio.

Por lo tanto, como el título valor fue suscrito por MARÍA CLARA SÁNCHEZ OCAMPO como representante legal de JUANCAMAR Y CIA S EN C, en su condición de deudor principal de la obligación, sin que dicha situación haya sido desconocida, resulta diáfano que la sociedad se encuentra obligada a su pago, pues el documento constituye plena prueba contra ella; más allá de que las discusiones en torno a la presunta nulidad del nombramiento de dicha representante, situación que en principio, no impide que se libere la orden de apremio, pues los requisitos previstos por el artículo 422 del Estatuto Procesal, y los particulares del título valor, se encuentran acreditados.

Por último, aunque la pasiva formula la excepción previa contemplada en el numeral 5 del artículo 100 del Estatuto Procesal denominada *"Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones"*, de sus argumentos no se advierte cuáles son los yerros formales de la demanda que, en su sentir, se presentan en este caso, o la indebida acumulación de pretensiones, pues esa defensa dilatoria en nada

³ Corte Suprema de Justicia. STL17302-2015. Radicación n° 62205

controvierte ni ataca los requisitos formales del libelo, y en este caso no se advierte inconsistencia alguna en lo que respecta a dichas exigencias, por lo que será despachada desfavorablemente; precisando que las alegaciones expuestas en punto al eventual pago de la obligación, es una discusión de fondo que se ventilará en la eventual sentencia.

Por lo anterior, observa el despacho el auto atacado se profirió conforme a derecho, pues el mandamiento de pago se soportó en un documento que cumple con los requisitos legales, sin que se encuentre viciado por error alguno; por lo que el mismo se mantendrá.

Con fundamento en lo expuesto y sin que se haga necesaria consideración adicional, el Despacho,

RESUELVE:

NO REPONER el proveído adiado 07 de diciembre de 2022, mediante el cual se libró mandamiento de pago en este asunto, conforme las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Notifíquese.
El Juez,

**LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO
(3)**

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría
Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023
ANDREA LORENA PÁEZ ARDILA Secretaría

DLR

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **795582580b38b42d985434e796ffb58f9aca8f567b61cfd3ebc2b995c2fe1ba**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **11001 31 03 025 2023 00284 00. C-2**

Resuelve el juzgado el recurso de reposición, en subsidio apelación, propuestos por la apoderada judicial de los demandados MARÍA CLARA SÁNCHEZ OCAMPO y CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ OCAMPO, contra la decisión adoptada en auto de calenda 15 de junio de 2023, por la cual se decretaron las medidas cautelares en este asunto.

1. Como fundamento de su inconformidad, manifestó, en síntesis, que el valor de las medidas cautelares decretadas supera el doble del monto de la obligación pretendida que es de \$2.560.545.800, pues el inmueble embargado, identificado con FMI 050C-01362634, tiene un valor de \$6.276.813.060,00. Por lo tanto, decretar el embargo de las sumas de dinero indicadas en los numerales 1 y 2 del proveído censurado, excede los límites legales establecidos, generando perjuicios a los demandados, lo que incluso podría afectar a terceros como empleados de la compañía, o pago de impuestos.

2. El apoderado del ejecutante refirió, en resumen, que los inmuebles sobre los cuales se solicitó el embargo, son objeto de garantía real, por lo que no es procedente limitar las medidas cautelares respecto de estos.

3. Frente a esos temas, debe recordarse que las medidas cautelares son instrumentos previstos por el legislador para asegurar los resultados de un eventual litigio, en caso de que prosperen las pretensiones de la demanda. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

“Sobre el particular, cabe señalar que las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia el tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin”. (C-925/99)

Estas cautelas pueden ser catalogadas como i) nominadas, siendo aquellas expresamente señaladas por el legislador, valga decir, el embargo, secuestro e inscripción de la demanda; y ii) las innominadas o atípicas, que proponen las partes o el juez a fin de asegurar el derecho subjetivo de las partes, siempre que resulten razonables y proporcionadas.

En el caso de los procesos ejecutivos como el que ocupa la atención del despacho, el artículo 599 del Estatuto Procesal prevé que *“Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado... El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, **salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito**, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad”* (se destacó)

Por su parte, el artículo 593 ib. señala que para efectuar embargos se procederá así: *“10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%)”*.

En virtud de lo anterior, para esta judicatura, la solicitud de medidas cautelares presentada por la parte actora se ajusta a las normas citadas, pues con ellas se pretende el aseguramiento de las sumas reclamadas con esta acción ejecutiva, en virtud del mandamiento de pago legalmente proferido; luego, no podía este despacho abstenerse de decretar las cautelas, pues ello conllevaría a cercenar el derecho con el que cuenta la actora para solicitar su práctica.

Téngase en cuenta que los inmuebles sobre los cuales se decretó el embargo, identificados con folios de matrícula inmobiliaria 50C-1362634, 50C-1362635 y 50N-281711, se encuentran gravados con hipoteca a favor del ejecutante, garantía que se encuentra expresamente excluida por el legislador del límite del *“doble del crédito cobrado”*, siendo entonces procedente la medida cautelar sobre estos sin que se exija dicho cálculo.

Además, la decisión cuestionada respeta las directrices establecidas por la norma procesal, en cuanto al límite del embargo en el caso de dineros depositados en establecimientos bancarios, pues la cuantía perseguida con esta acción acumulada es de \$ \$2.560.545.800,96 más sus intereses moratorios, por lo que el embargo se limitó a \$3.500.000.000,00, monto que no excede del valor del crédito y las costas aumentado en un cincuenta por ciento (50%), siendo claro que el auto recurrido se encuentra ajustado a derecho.

En todo caso, si el demandado considera que los embargos son desmedidos o que pueden llegar a ocasionar afectaciones en su patrimonio, o terceros, cuenta con la posibilidad de impedir su práctica o levantar aquellos que se encuentre practicados, de conformidad con lo previsto en los artículos 600 a 602 del

CGP.

Por lo anterior, al encontrarse ajustada la decisión recurrida, se negará el recurso horizontal, para conceder la alzada subsidiaria, con fundamento en el numeral 8 del artículo 321 del señalado código procesal.

Con fundamento en lo expuesto y sin que se haga necesaria consideración adicional, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el proveído adiado 15 de junio de 2023 mediante el cual se decretaron las medidas cautelares en este asunto, conforme las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONCEDER en el efecto devolutivo, ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el recurso subsidiario de apelación, para lo cual secretaría deberá remitir copia digital íntegra del expediente.

Notifíquese.
El Juez,

**LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO
(3)**

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría
Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023
ANDREA LORENA PÁEZ ARDILA Secretaria

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bbd9cd040417949b29e864be5619e9d905c1f6c952776322c7e8dcf42f1a31b5**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **110013103025 2023 00284 00. C-1**

Se tienen notificados personalmente a los demandados MARÍA CLARA SÁNCHEZ OCAMPO y CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ OCAMPO, de conformidad con el acta de notificación suscrita el pasado 22 de junio de 2023 (PDF 006).

Asimismo, se tiene por intimada a la sociedad JUANCAMAR Y CIA S EN C, en atención a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, conforme a la documental adosada a PDF 010.

Se reconoce personería a la abogada LINA MARÍA GRIMALDOS PADILLA como mandataria judicial del extremo pasivo, en los términos y para los fines de los poderes conferidos (PDF 008 y 014); quien, presentó recursos de reposición contra el mandamiento de pago y el auto que decretó medidas cautelares, sobre los cuales se dispuso en autos aparte de esta misma fecha. Asimismo, formuló excepciones de mérito, frente a las cuales se manifestó la parte actora (cd. 3)

De otro lado, el despacho niega la solicitud de terminación del proceso elevada por la parte demandada, como quiera que no cumple con los presupuestos del artículo 461 del CGP (PDF 036 cd. 3). No obstante, los pagos y argumentos que se aducen en el referido escrito se ponen en conocimiento de la parte actora para que, en el término de tres (3) días siguientes a la notificación por estado de este proveído, se manifieste al respecto e indique si coadyuva la solicitud de terminación, o en su defecto, si desea continuar con el curso procesal.

Transcurrido el término anterior, ingrese el proceso nuevamente al despacho para decidir lo que legalmente corresponda.

Notifíquese y cúmplase.

El juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO
(3)

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,
D.C.
Secretaría

Notificación por Estado

La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023

ANDREA LORENA PÁEZ ARDILA
Secretaría

DLR

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8e24010e546af2f562012c44aa06330ad549b262aae81941a6ea42a3ab1d8c34**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **110013103025 2023 00322 00.**

Obre en autos el citatorio remitido por la parte actora a Central de Inversiones S.A., con resultado efectivo (PDF 012).

Se tiene notificado por conducta concluyente a la sociedad demandada, con el escrito de reposición presentado a PDF 014, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 301 del C. G. del P. Frente a la censura se dispuso en auto aparte de esta misma fecha.

Téngase en cuenta que la demandada contestó la demanda y formuló excepciones de mérito (PDF 016 y 020), defensas frente a las cuales se manifestó la parte actora (archivo 023 y 028).

De otro lado, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 610 del Estatuto Procesal, se dispone la vinculación al presente trámite de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

Téngase en cuenta que el demandante gestionó la notificación de la mencionada entidad el pasado 04 de septiembre del año en curso (pág. 4 a 6 archivo 025); no obstante, al momento del ingreso del expediente al despacho (13 de septiembre de 2023), el término con el que contaba la citada para comparecer al proceso y, de ser el caso, ejercer su derecho de defensa, aún no había transcurrido.

Por lo tanto, se ordena que por secretaría se reanude la contabilización de dicho lapso, a partir de la notificación por estado de esta decisión. Transcurrido el término legal en su integridad, ingrese las diligencias nuevamente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO
(2)

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría
Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023
ANDREA LORENA PÁEZ ARDILA Secretaria

D.L.R

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b21fee0ef3c186a9f9611cfb4a56aa5e010f8b13e7060969fb6ae73fb0e4041a**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **110013103025 2023 00322 00.**

Resuelve el juzgado el recurso de reposición en subsidio apelación, propuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra el auto admisorio de la demanda de fecha 21 de julio de 2023.

1. La censura fue fundamentada, en síntesis, en que la demanda debió ser inadmitida, dado que el dictamen pericial presentado como prueba es superior a un año, por lo que no reúne los requisitos formales. Además, la parte actora no ha notificado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, intimación que resulta necesaria dado que la demandada Central de Inversiones S.A. es una sociedad de economía mixta.

2. Frente a esas manifestaciones, la parte actora manifestó, en resumen, que haber presentado el avalúo referido por la demandada, no es una causal para la inadmisión de la demanda, pues esa situación no está prevista en el artículo 90 del CGP. En todo caso, de forma subsidiaria solicitó al despacho se decretara el dictamen pericial con el fin de conocer el valor actual de las mejoras realizadas por el actor, así como la identificación de estas, teniendo en cuenta que el demandante no se encuentra en la capacidad de realizar este nuevo avalúo al no contar con la posesión del inmueble.

Asimismo, que la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es un requisito para la admisión de la demanda; sin embargo, procedió con su enteramiento.

3. Frente a esos temas, lo primero que debe precisar el despacho es que, para la admisión de la demanda, esta debe cumplir con los requisitos formales previstos en el canon 82 y siguientes de la norma procesal, los cuales en este asunto se observan acreditados, sin que dentro de estos se exija la presentación de un dictamen pericial, de manera particular, para el caso de estudio. Por lo tanto, la experticia aportada con el libelo es una prueba que el demandante se encuentra facultado para allegar en caso de que pretenda acreditar los perjuicios reclamados, sin que la fecha de su elaboración afecte o impida la admisión de la demanda.

Además, en la solicitud de pruebas la parte demandante refirió: *“En caso de ser necesario, y debido a la imposibilidad de generar un avalúo nuevo, solicito al honorable despacho se decrete prueba pericial, para que se asigne profesional en el área de construcción*

(arquitectura, ingeniero civil, y/o evaluador) para que determine el valor de las mejoras realizadas en el inmueble ubicado en la Cra 10ª # 22B-36 SUR, de Bogotá o se actualice el presentado por el ingeniero Catastral William Robledo Giraldo identificado con cédula No. 19424858”, solicitud que, sobre su procedencia se dispondrá en su momento, es decir, al momento de calificar y decretar las pruebas en este asunto.

En lo que respecta a la intimación de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, le asiste razón al demandante cuando aduce que ésta no es un requisito para la admisión de la demanda, por lo que su falta de enteramiento en nada repercute para dar iniciación al proceso; sin embargo, como su comparecencia resulta pertinente y además necesaria por mandato legal (art. 610 CGP), dado que la demandada es una sociedad comercial de economía mixta, del orden nacional, en auto de esta misma fecha dispuso su vinculación.

En ese orden de ideas, es claro que el proveído recurrido deberá mantenerse, en el entendido en que se profirió conforme a derecho y no se encuentra viciado por error alguno; precisando que no se concederá la alzada subsidiaria en el entendido que la decisión recurrida no se encuentra dentro del listado taxativo establecido en el artículo 321 del C. G. del P., ni en otra disposición legal especial.

Con fundamento en lo expuesto y sin que se haga necesaria consideración adicional, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto admisorio de fecha 21 de julio de 2023, conforme las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR la concesión del recurso subsidiario de apelación, por lo considerado en este auto.

Notifíquese.
El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO
(2)

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023 ANDREA LORENA PÁEZ ARDILA Secretaria

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cc044a12144edcdc9bc91695ca4f962bcc6d3a892a3c27e139876463157799fd**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:21 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés

Radicado. **110013103025 2023 00485 00.**

Por reunir las exigencias legales se ADMITE la presente demanda VERBAL promovida por el EDIFICIO PARQUE LA CABRERA – PROPIEDAD HORIZONTAL- contra EDIFICIO PROYECTO PARQUE 86 - PROPIEDAD HORIZONTAL-.

Tramítese por el procedimiento VERBAL.

De la demanda y sus anexos, córrase traslado a la parte demandada por el término legal de VEINTE (20) DÍAS.

Notifíquese conforme lo establecen los artículos 290 a 293 del C. G del P., en concordancia con el art. 8° de la ley 2213 de 2022.

Previo a decidir de las medidas cautelares deprecadas, conforme lo normado en el numeral 2° del artículo 590 del Estatuto Procesal, la parte demandante proceda a prestar caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, esto es por la suma de \$200'000,000,00; si la caución se constituye por medio de póliza, deberá allegarse adicionalmente, la constancia del pago de la prima.

Se reconoce personería jurídica a la abogada JESSICA MARCELA TORRES BENITO como apoderada judicial de la parte actora, para los efectos y conforme el poder conferido.

Notifíquese.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría
Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023
ANDREA LORENA PAEZ ARDILA Secretaria

ysl

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **351b5ef9bc34911deaedb5dbfe8e4945684243c3bb1708bb841fb2a8899b7b13**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **110013103025 2023 00520 00**

Habiéndose presentado la prueba de la obligación con el lleno de los requisitos de los artículos 422 y 430 del Código General del proceso, el Juzgado DISPONE:

Librar mandamiento ejecutivo en contra de DIEGO OCAMPO DUQUE, para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de este proveído, pague en favor de BANCO DAVIVIENDA S.A. las siguientes sumas de dinero, así:

1. \$ 229.937.704,00 por concepto de capital insoluto contenido en el pagaré No. 110000725257, allegado como base de ejecución, más los intereses moratorios causados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la demanda, y hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación; liquidados a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera.

2. \$39.008.085,00, por concepto de intereses corrientes o remuneratorios contenidos en el pagaré No. 110000725257, allegado como base de ejecución.

Sobre las costas se dispondrá en su oportunidad.

Notifíquese a la parte ejecutada conforme lo prevén los artículos 291 y 292 del C.G.P., en armonía con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

Por Secretaría, ofíciase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, en los términos del artículo 630 del Estatuto Tributario.

Se reconoce personería a la abogada MARLY ALEXANDRA ROMERO CAMACHO como apoderada judicial de la parte actora, en los términos y para los fines del mandato conferido.

Notifíquese.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

(2)

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ,
D.C.
Secretaría

Notificación por Estado

La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023

ANDREA LORENA PÁEZ ARDILA
Secretaría

DLR

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9a4ba1fcbe3dd9e70f3b7d23537da89250372ea6f9eb7c562d0a3af2e75cf7f**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

Radicado. **110013103025 2023 00514 00**

Habiéndose presentado la prueba de la obligación con el lleno de los requisitos de los artículos 422 y 430 del Código General del proceso, el Juzgado DISPONE:

Librar mandamiento ejecutivo en contra de JOSÉ DANIEL RAMÍREZ PACHON, para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de este proveído, pague en favor de BANCOLOMBIA S.A. las siguientes sumas de dinero, así:

1. \$138.888.895,00 por concepto de capital insoluto acelerado, contenido en el pagaré No. 1410095952 aportado como base de la acción y conforme al libelo introductor; además de los intereses moratorios generados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la demanda y hasta cuando se verifique el pago total de la obligación; liquidados a la tasa máxima legal permitida.

2. \$33.333.330,00, por concepto de las cuotas de capital vencidas y no pagadas contenidas en el pagaré No. 1410095952, correspondientes a los meses de mayo a octubre 2023, conforme fueron discriminadas en el libelo introductor.

3. \$15.799.284,00, por concepto de intereses remuneratorios o de plazo de las cuotas vencidas y no pagadas correspondientes a los meses de mayo a octubre 2023, conforme fueron discriminados en el libelo introductor.

Sobre las costas se resolverá en su oportunidad.

Notifíquese a la parte ejecutada conforme lo prevén los artículos 291 y 292 del C.G.P., en armonía con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

Por Secretaría, ofíciase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, en los términos del artículo 630 del Estatuto Tributario.

La abogada LUISA FERNANDA PINILLOS MEDINA actúa como endosataria en procuración de la parte actora.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

(2)

JUZGADO 25 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. Secretaría Notificación por Estado
La providencia anterior se notificó por anotación en estado el 15 de noviembre de 2023 ANDREA LORENA PÁEZ ARDILA Secretaría

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ec21311720fa06c64f929b88ef082bf15760132b4f7e7248e5a20b103b0999c2**

Documento generado en 14/11/2023 02:32:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>